

FLASHES A.S.E.P.
MARZO - 1.995

FICHA TECNICA

Diseño y Realización:	De la investigación, del cuestionario y de la muestra: A.S.E.P.
Diseño Muestral:	1.219 personas de uno y otro sexo, de 18 y más años, residentes en España. Muestra aleatoria estratificada por Comunidades Autónomas y municipios, utilizando sistema de rutas aleatorias y selección final de los entrevistados mediante la técnica de Random Route.
Trabajo de Campo:	Realizado durante los días <u>6 a 11 de Marzo de 1995</u> , mediante encuesta personal en el hogar de cada entrevistado, por la Red de Intercampo, S.A. Supervisión del trabajo de Campo realizado por A.S.E.P.
Proceso de Datos:	Diseñado y realizado por A.S.E.P. con "software" propio, elaborado por J.D. Systems.
Análisis e Informe:	Diseñado y realizado por A.S.E.P., y terminado el <u>24 de Marzo de 1.995.</u>

Análisis e Interpretación de Datos:

SARA CORTES GARCIA
Javier Díez Medrano
Luis Corominas i Albert
Belén García del Ordi

Proceso de Textos:

PALOMA MILLAN MARTINEZ
Esperanza Celdrán Lucía
Marta Barahona Zamorano
Sonia Moya Jiménez

Dirección:

JUAN DIEZ NICOLAS

COPYRIGHT ASEP S.A., 1995. PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, INCLUSO CITANDO LA FUENTE.

I
"FLASHES"
(MARZO 1995)

De la misma forma que al comentar los datos del sondeo mensual del pasado mes de Diciembre se advirtió que el trabajo de campo se había realizado durante la semana del "viaducto" (los puentes derivados de las fiestas del 6 y 8 de ese mes), lo que explicaba que el clima de opinión fuera algo menos crítico y pesimista, a causa del espíritu de vacación reinante y de la menor presencia de informaciones políticas en todos los medios de comunicación, al comentar los datos de este mes de marzo hay que subrayar que el trabajo de campo se inició el mismo lunes en que se anunciaba la devaluación de la peseta ("realineamiento", según el Gobierno), y sólo unos días después de la detención o entrega voluntaria de Luis Roldán, noticias ambas que probablemente han irritado aún más a una opinión pública que comienza a mostrar claros signos de profundo malestar y descontento con la situación política, económica y social. Por las razones ya citadas, de otra parte, se pudo incorporar al cuestionario, en el último momento, alguna pregunta relativa a Roldán, pero fue imposible hacer lo mismo con la devaluación de la peseta, lo que no obsta para que tal acontecimiento estuviese en la mente de los entrevistados al contestar al cuestionario, y en especial a las preguntas fijas que habitualmente miden la opinión sobre la situación económica.

II

Es así como se explica que los dos índices más significativos sobre la evaluación y expectativas de la situación económica, el Sentimiento del Consumidor y el de Evaluación de la Situación Económica de España, literalmente se desplomen hasta alcanzar mínimos casi sin precedentes, sólo algo superiores a los que se alcanzaron a finales de 1992. Concretamente, el ISC ha perdido nueve puntos en un solo mes, y es sólo un punto superior al del pasado mes de abril (cuando la crisis de Rubio y Roldán), y el IESE pierde quince puntos sólo en un mes, alcanzando por supuesto el nivel más bajo de los últimos doce meses.

No se observan cambios importantes, sin embargo, en los indicadores de ahorro, que suelen ser bastante estables, ni en el habitual alto grado de Satisfacción con la Calidad de Vida, pero disminuye también el Optimismo Personal (seis puntos respecto al mes de febrero), alcanzando el nivel más bajo desde el pasado mes de abril.

Los indicadores políticos sí reflejan, por el contrario, esta nueva dosis de desencanto y frustración derivada de las dos noticias citadas. Así, el índice de Satisfacción con el Gobierno pierde nueve puntos desde febrero, repitiendo el mínimo histórico que ya se había alcanzado en abril de 1994. Pero, aún más grave, y como se venía temiendo y anunciando desde el pasado otoño, el índice de Satisfacción con la Democracia ha traspasado el umbral del nivel de equilibrio, y al perder siete puntos en un solo mes, se sitúa por primera vez desde que se inició su utilización en los sondeos ASEP (septiembre de

III

1988), dos puntos por debajo del nivel 100, lo que significa que los insatisfechos con la democracia son dos puntos porcentuales más que los satisfechos. Es evidente que el continuado deterioro de la situación política por los escándalos de corrupción está ya afectando de forma grave a la credibilidad de las instituciones democráticas entre los españoles.

Coherentemente con este clima de opinión, disminuye la valoración de todas las instituciones por las que se ha preguntado este mes, fijas o no fijas, respecto a la última medición, (desde ocho décimas en el caso de la ONU hasta sólo dos décimas en el caso de los Bancos). Concretamente, la Corona sigue siendo con gran diferencia la institución mejor valorada (7,1 puntos en una escala de 0 a 10 puntos), seguida de la Unión Europea, la ONU y las Fuerzas Armadas (entre 5,6 y 5,0 puntos), de los Bancos y la OTAN (4,6 y 4,1 puntos), y del Gobierno de la Nación (3,6 puntos), que obtiene su tercera valoración más baja desde que se iniciaron estos sondeos, sólo tres décimas más que en abril de 1994 y dos décimas más que en noviembre pasado.

Todos los líderes por los que se ha preguntado, fijos o no fijos, reciben una valoración inferior a la última disponible, con la única excepción del juez Garzón, que aumenta una décima respecto a febrero y se sitúa en la misma valoración que tenía en enero (la mayor pérdida es la experimentada por Luis Angel Rojo, doce décimas, y la menor es la de Aznar, sólo una décima). El análisis de estas valoraciones pone de manifiesto otros hechos notables, como el que, por primera vez desde que se

IV

iniciaron estos sondeos, la valoración de Felipe González traspasa, hacia abajo, el nivel de los 4,0 puntos, logrando así su mínimo histórico. Además, su valoración no sólo es inferior a la de Anguita, como es habitual, sino también inferior a la de Aznar, lo que no ocurría desde junio de 1994 (cuando las elecciones europeas). Por supuesto, la valoración más alta, y con gran diferencia sobre el resto, es la del Rey Juan Carlos (7,7 puntos), seguido de Garzón (6,0 puntos), Suárez (5,4 puntos), Anguita, el juez Barbero, Jerónimo Saavedra y Aznar (entre 4,5 y 4,0 puntos), y finalmente Luis Angel Rojo y Felipe González (ambos con 3,9 puntos).

Como cabía esperar, las repercusiones de este clima de opinión sobre las intenciones de voto han sido igual de contundentes que sobre la valoración de instituciones y líderes. La estimación de voto elaborada por ASEP muestra un incremento en la diferencia de voto entre PP y PSOE, que este mes es ya de diez puntos porcentuales sobre censo electoral (13 puntos sobre votantes, suponiendo una abstención del 29%). Pero, además, sigue reduciéndose la diferencia entre PSOE e IU, que este mes es sólo de siete puntos sobre censo (diez puntos sobre votantes).

LA ACTUALIDAD

Las noticias sobre política nacional han seguido acaparando la actualidad informativa, y por tanto han constituido también el objeto principal de este bloque de preguntas en el sondeo ASEP, como en meses

anteriores. De manera concreta, se ha preguntado sobre los últimos acontecimientos en relación con los casos GAL, FILESA y Roldán, así como por la imagen comparada de González y Aznar y, como todos los meses, por la integración de España en la Unión Europea.

El Caso GAL

Más de la mitad de los entrevistados se muestran de acuerdo con el encarcelamiento preventivo del ex-Secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, ordenado por el juez Garzón, y sólo un 12% se muestra en desacuerdo con esta medida.

Utilizando una escala de 1 (nada convencido) a 5 (muy convencido), un 31% de los entrevistados afirma estar muy convencido de que se han utilizado métodos no legales en la lucha contra el terrorismo, y un 38% dice estar muy convencido de que ha existido apropiación de fondos reservados por parte de altos cargos de la lucha antiterrorista, frente a un 10 y 11 por ciento respectivamente que afirman no estar nada convencidos. (Los correspondientes promedios son de 3,7 y 3,8 puntos, lo que demuestra un alto grado de convencimiento respecto a ambas cuestiones).

Mediante una escala también de 5 puntos, en la que el 1 significa muy baja credibilidad y 5 muy alta credibilidad, los entrevistados conceden en general una baja credibilidad (2,8 puntos) a las declaraciones formuladas por el anterior y el actual Presidente del Tribunal Constitucional y por otras personalidades, como

VI

el General Sáenz de Santamaría que pretendían exculpar al Gobierno de responsabilidades en el caso GAL. Pero tampoco conceden mucha credibilidad (2,3 puntos) a las declaraciones de los ex-comisarios Amedo y Domínguez, que pretenden inculpar al Gobierno de las acciones de los GAL.

En cuanto a las afirmaciones de Felipe González y otros líderes socialistas relativas a que la guerra sucia contra ETA, así como la organización de los GAL, comenzaron durante los Gobiernos de UCD, cuando Suárez era Presidente, un 25% creen que efectivamente estas dos actividades se iniciaron bajo los Gobiernos centristas de Suárez, pero un 35% creen que se iniciaron bajo los Gobiernos socialistas de Felipe González.

De las tres cuestiones que parecen entremezclarse en el caso GAL, la utilización de métodos ilegales para luchar contra el terrorismo, la utilización ilegal de fondos reservados, y la utilización de fondos reservados para el enriquecimiento personal de altos cargos del Ministerio del Interior, un 39% de entrevistados piensa que la oposición critica por igual las tres cuestiones, y un 32% creen que lo que más critican es la utilización de fondos reservados para el enriquecimiento personal. Pero, lo que los propios entrevistados critican más es el enriquecimiento personal a través de los fondos reservados (46%), aunque un 27% critica las tres cosas. Estos datos deben llevar a reflexión, puesto que sólo algo más de una cuarta parte de los entrevistados condena los tres aspectos (y nada impedía que el 100% hubiera dado esa respuesta). Pero el resto de los

VII

entrevistados condena sobre todo el enriquecimiento personal de altos cargos con fondos reservados (46%, como se ha indicado), mientras que sólo un 6% condena la utilización de métodos ilegales para luchar contra el terrorismo, y un 7% la utilización ilegal de fondos reservados. Sólo un 3% de los entrevistados afirma no condenar ninguna de las tres cosas, mientras que un 10% no contesta la pregunta.

Más de la mitad de los entrevistados cree que la polémica sobre los GAL beneficiará sobre todo al PP. Pero, mientras que algo más de una quinta parte afirma no estar de acuerdo con los argumentos utilizados en esta polémica por ninguno de los partidos políticos, menos de esa proporción muestra su acuerdo, respectivamente, con los argumentos utilizados por el PP (19%), por el PSOE (16%) o por IU (14%). Y, considerando otros aspectos de este caso, un 34% de los entrevistados opina que el PP es el partido que está utilizando tácticas más sucias, con mentiras y calumnias, para descalificar a otros partidos en esta polémica, pero un 23% señala al PSOE.

A manera de resumen, la opinión pública española cree mayoritariamente (44%) que el Gobierno organizó los GAL, y sólo un 21% opina que los GAL surgieron y actuaron sin que el Gobierno lo supiera. Puede que, por ello, un 72% de los entrevistados opine que el Juez Garzón debería continuar con el caso GAL y llegar hasta el final, frente a un 10% que opina que Garzón debería dejar voluntariamente el caso, un 4% que cree que debería ser obligado a dejarlo, y un 6% que afirma que se debería olvidar el caso GAL y cerrarlo para siempre.

VIII

El Caso FILESA

La principal novedad en este caso fue la petición de suplicatorio para poder juzgar a Alfonso Guerra, formulada por el juez Barbero. Un 46% de los entrevistados afirma estar de acuerdo con esta petición, frente a sólo un 13% que dice estar en desacuerdo. Coherentemente, un 40% dice estar en desacuerdo con la decisión del Tribunal Supremo rechazando el suplicatorio, mientras que un 14% está de acuerdo con su decisión.

El Caso Roldán

Puesto que al redactar las preguntas sobre esta cuestión lo único que se sabía era que Roldán había sido detenido (o se había entregado) en Laos, sin que se conociesen todavía los pormenores (documentos de extradición) ni se hubiese celebrado la comparecencia del Ministro Belloch en el Congreso, pocas eran las cuestiones sobre las que se podía preguntar, pues la opinión pública estaba todavía muy desorientada y confusa sobre lo que había ocurrido y cómo. Aún así, un 47% de los entrevistados creía que la detención de Roldán se debía a que el Gobierno había llegado a un acuerdo con él para que la condena fuese pequeña, mientras que un 15% creía entonces que se debía a una gran labor de la policía, actuando con independencia del Gobierno, y un 11% opinaba que se debía a los esfuerzos realizados por el Gobierno para detenerle.

En esta misma línea de desconfianza inicial de la opinión pública, un 40% de los entrevistados estaban convencidos de que Roldán "no tirará" de la manta a

IX

cambio de una condena corta, frente a un 21% que cree que "tirará" de la manta pero sin inculpar a todos los responsables, y un 19% que cree que "tirará" de la manta e inculpará a altos cargos del Gobierno socialista sin ocultar nada.

La Imagen de González y Aznar

La falta de confianza de los españoles en la clase política en general, ya señalada a lo largo de este informe, se demuestra una vez más en la escasa confianza que parecen depositar en los principales líderes políticos, como ya se comentó también el mes pasado. Un 58% y un 61% de los entrevistados afirman tener poca o ninguna confianza en González o Aznar, respectivamente, para solucionar los principales problemas del país (56% y 59% el mes pasado).

España y la Unión Europea

Como ya es habitual, se ha medido otra vez el grado de satisfacción general con la pertenencia de España a la UE, pudiéndose apreciar este mes un nivel de satisfacción algo superior al de meses precedentes.

La percepción del grado en que la pertenencia a la UE beneficia a España y a la Comunidad Autónoma en que reside el entrevistado parece ser positiva en ambos casos, algo mayor para España, como en meses pasados. En ambos casos, alrededor del 60% de los entrevistados piensan que la pertenencia es beneficiosa, y sólo una cuarta parte cree que es más bien perjudicial.

